

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	ELVIA ROSA PÉREZ BLANQUICETH, DEYNER DAVID DÍAZ PÉREZ, y DARWIN YESID DÍAZ PÉREZ
DEMANDADO	COLPENSIONES y UGPP
RADICADO	05001-31-05-004-2016-01166-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Pensión de sobrevivientes por muerte de afiliado, origen del fallecimiento.
DECISIÓN	Revoca, adiciona y confirma.

Medellín, veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Estudiado, discutido, y aprobado en Sala virtual.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”; y surtido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por los señores **ELVIA ROSA PÉREZ BLANQUICETH, DEYNER DAVID DÍAZ PÉREZ, y DARWIN YESID DÍAZ PÉREZ** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES** y la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 027**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ANTECEDENTES

Es materia de la Litis, decidir los recursos de apelación presentados por los apoderados judiciales de la parte demandante y la UGPP, así como el grado jurisdiccional de consulta favor de esta última entidad, contra la sentencia que profirió el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín - Antioquia, en la audiencia pública celebrada el día 19 de septiembre de 2019, dentro del proceso referenciado.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que la señora ELVIA ROSA PÉREZ BLANQUICETH convivió en calidad de compañera permanente con el señor FEDER ANTONIO DÍAZ MEDINA, y fruto de esa unión procrearon dos hijos DEYNER DAVID y DARWIN YESID DÍAZ PÉREZ.

Que el señor DÍAZ MEDINA falleció el día 13 de febrero de 1997, cuando se encontraba laborando al servicio de su empleador “FINCA LA PALMERA” ubicada en la vereda “Guapá” del municipio de Chigorodó – Ant, donde cumplía funciones de capataz, mantenimiento de la finca y cuidado del ganado, siendo abordado por unos sujetos que lo retiraron de la finca para luego asesinarlo en sus cercanías.

Con ocasión al fallecimiento del afiliado DÍAZ MEDINA, la señora ELVIA ROSA PÉREZ BLANQUICETH actuando en nombre propio y en representación de sus hijos menores, elevó solicitud pensional ante el Instituto de Seguros Sociales el día 29 de mayo de 1997, y dicha entidad mediante resolución N° 00308 de 1998 accedió al pago de la pensión de sobrevivientes de origen profesional, no obstante, la referida prestación económica solo fue reconocida hasta el 30 de agosto de 2002, cuando se expidió la resolución N° 0892 del 3

de septiembre de 2002, mediante la cual se revocó la resolución inicial, bajo el argumento que el fallecimiento del afiliado FEDER ANTONIO DÍAZ MEDINA había sido calificado como de origen común, por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia mediante dictamen N° 2539 del 9 de junio de 1999, acto administrativo y dictamen que jamás le fueron notificados a la parte demandante.

Relata la activa que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES también expidió la resolución N° 14486 del 19 de noviembre de 1999, negando la pensión de sobrevivientes de origen común, al no reunirse por parte del afiliado fallecido, la densidad mínima de cotizaciones exigida en el numeral 2° del art. 46 de la Ley 100 de 1993, esto es, 26 semanas cotizadas en toda su vida laboral; acto administrativo que tampoco les fue notificado a los demandantes, quienes debieron valerse de varios derechos de petición y hasta una acción de tutela, para conocer los motivos por los cuales les había sido suspendido el derecho pensional.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que SE DECLARE que la suspensión del derecho pensional por parte de POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., fue injustificada, en consecuencia, se CONDENE a esta administradora de riesgos laborales, a continuar pagando a los señores ELVIA ROSA PÉREZ BLANQUICETH, DEYNER DAVID DÍAZ PÉREZ, y DARWIN YESID DÍAZ PÉREZ la pensión de sobrevivientes causada con el fallecimiento de su compañero y padre, el señor FEDER ANTONIO DÍAZ MEDINA, en forma retroactiva a partir del 1° de septiembre de 2002, junto con los intereses moratorios del art. 141 de la ley 100 de 1993, y las costas del proceso.

Y como PRETENSIÓN SUBSIDIARIA, solicita que en caso de decretarse que el fallecimiento el afiliado FEDER ANTONIO DÍAZ MEDINA fue de origen común, la pensión de sobrevivientes quede a cargo de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

COLPENSIONES (fls. 70 al 75 y 174 al 179): a través de su apoderado judicial aceptó como ciertos los hechos relativos al fallecimiento del afiliado FEDER ANTONIO DÍAZ MEDINA, así como la existencia y contenido de los actos administrativos anunciados en la demanda, sin que le consten los restantes supuestos fácticos, los cuales deberán ser objeto de debate probatorio en la presente litis; se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones formuladas, proponiendo en su defensa las excepciones de mérito que denominó: *“inexistencia de la obligación por falta de requisitos legales para el reconocimiento de lo solicitado; inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios; ausencia de causa para pedir; prescripción; buena fe de Colpensiones; imposibilidad de condena en costas; y compensación”*.

A su turno, **POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.** (fls. 83 al 100): a través de su apoderada judicial dio respuesta a la demanda, pero propuso las excepciones previas de “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA”, y “HABERSE NOTIFICADO EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA A PERSONA DISTINTA A LA QUE FUE DEMANDADA”, advirtiendo que en virtud del art. 80 de la Ley 1753 de 2015, operó en el sub lite, una sucesión procesal entre POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. y la UGPP, siendo esta última entidad, quien debe asumir el pago de las pensiones cuyos derechos se causaron originalmente en el Instituto de Seguros Sociales.

La referida excepción, fue acogida por el juez de primer grado en la audiencia del art. 77 del CPTSS, celebrada el día 09 mayo de 2019 (fls.188-189), en la que ordenó desvincular de la relación jurídico procesal a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A, y continuar la acción contra la UGPP.

La **UGPP** en su calidad de sucesora procesal, dio respuesta a la demanda en escrito visible a folios 162 al 164 del plenario, indicando frente a los hechos narrados por la activa, que no le constan ninguno de ellos, pues la UGPP no hizo parte de los trámites administrativos tendientes al reconocimiento y pago de la pensión, y tampoco cuenta con el expediente administrativo del afiliado fallecido FEDER ANTONIO DÍAZ MEDINA; se opuso a la prosperidad

de todas y cada una de las pretensiones formuladas, proponiendo en su defensa las excepciones de mérito que denominó: *inexistencia de la obligación; y prescripción*”.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En el fallo objeto de apelación y consulta, el juez *A Quo* en audiencia pública de juzgamiento, celebrada el 19 de septiembre de 2019, DECLARÓ que el fallecimiento del señor FEDER ANTONIO DIAZ MEDINA era de origen profesional, en consecuencia, CONDENÓ a la UGPP como sucesora procesal de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., a continuar pagando una pensión de sobrevivientes a los señores ELVIA ROSA PÉREZ BLANQUICETH (compañera permanente), y al joven DARWIN YESID DÍAZ PÉREZ, en cuantía mínima y sobre 14 mesadas anuales.

En relación con la señora ELVIA ROSA PÉREZ BLANQUICETH, DECLARÓ parcialmente probada la excepción de prescripción frente a las mesadas causadas con anterioridad al 3 de octubre de 2013, y a título de retroactivo pensional, dispuso el pago de \$55.200.841.

A favor del joven DARWIN YESID DÍAZ PÉREZ, dispuso el pago de \$39.161.200, por concepto de retroactivo pensional causado entre 1° de septiembre de 2002, y el 3 de septiembre de 2014, fecha en que cumplió la mayoría de edad.

De otro lado, declaró probaba la prescripción total de las mesadas pensionales causadas a favor del joven DEINER DAVID DÍAZ PÉREZ, por no haber reclamado su derecho, dentro de los 3 años siguientes al cumplimiento de la mayoría de edad.

También condenó a la UGPP al reconocimiento y pago de los intereses moratorios del art. 141 de la ley 100 de 1993, a partir del 3 de octubre del año 2013 para la compañera permanente ELVIA ROSA PÉREZ BLANQUICETH y a partir del 2 de septiembre de 2002 para el hijo DARWIN YESID DÍAZ PÉREZ.

Y finalmente, ABSOLVIÓ a COLPENSIONES de todas las pretensiones y cargos formulados en su contra, e impuso las costas procesales en la primera instancia a cargo de la UGPP, y a favor de la parte demandante, fijando como agencias en derecho la suma de \$6.852.314.

Como fundamento de su decisión, estimó el juez de primer grado que el fallecimiento del señor FEDER ANTONIO DÍAZ MEDINA fue profesional, dado que este afiliado se encontraba laborando, cumpliendo una jornada laboral, y subordinado un empleador, cuando fue sustraído por la fuerza para luego ser asesinado, y que la calificación del origen del accidente de trabajo efectuadas por las juntas médicas, resulta contraria a la ley y la jurisprudencia nacional.

También dejó en claro el fallador de instancia que, si bien en la litis no era tema de debate la convivencia con el causante, este requisito quedó acreditado con suficiencia en el expediente administrativo, pues para la fecha del insuceso, la convivencia mínima era de 2 años.

Y en relación con los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, coligió que los mismos sí resultaban procedentes, para resarcir el daño que sufrieron los demandantes con la suspensión injustificada del derecho pensional.

VI. – RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

APELACIÓN – PARTE DEMANDANTE: su apoderado judicial expone en su alzada dice no estar de acuerdo frente a la prescripción declarada en disfavor del joven DEINER DAVID DÍAZ PÉREZ, pues este joven el día 23 de abril de 2015 junto a su madre y hermano, elevó reclamación administrativa ante la UGPP, interrumpiendo así el fenómeno prescriptivo en forma oportuna, pues arribó a la mayoría de edad el día 5 de septiembre de 2012.

APELACIÓN DE LA UGPP: su apoderada judicial, solicita la revocatoria de la providencia impugnada, pues considera que el fallecimiento del afiliado DÍAZ MEDINA no puede ser considerado un accidente de trabajo en los términos del art. 9 del Decreto 1295 de 1994, normatividad aplicable en el presente evento, según este precepto legal, es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte, es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo, e igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajos desde su residencia a los lugares trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

Afirma que, según la jurisprudencia de la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia (sentencia 23449 de 2006, 23202 de 2005, y 32216 de 2009), debe existir un nexo de causalidad para que el accidente sea calificado como laboral, y en el presente evento, conforme las pruebas practicadas en el sub lite, es claro, que el deceso del señor DÍAZ MEDINA, no está relacionado con las labores por él realizadas en la FINCA LA PALMERA, pues ni la finca, sus propietarios, y demás trabajadores, llegaron a recibir amenazas de grupos armados, y tampoco existe investigación de la Fiscalía General de la Nación que permita constatar que los trabajadores de esa finca estuvieren en riesgo para esa época.

Indica la recurrente, que no haberse presentado más homicidios en la finca la palmera, de debe colegir necesariamente que el homicidio del causante se dio motivos personales, ajenos a su trabajo, pus no puede perderse de vista que el origen del accidente fue debidamente calificado por las juntas medicas como de origen común.

Y finalmente expone en su alzada que, en el hipotético caso de confirmarse el derecho pensional, se revoque la condena por intereses moratorios, toda vez que la entidad contaba con argumentos técnicos y jurídicos para negar la prestación económica deprecada.

Alegatos de conclusión.

Encontrándose dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la apoderada judicial de COLPENSIONES, Dra. EDUILCE CORREA ARGUELLES portadora de la T.P. N° 235.514 del C.S. de la J., presentó su escrito de alegaciones, solicitando se confirme íntegramente la sentencia recurrida, en la cual se condenó a la UGGP a continuar pagando el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de origen laboral a la señora ELVIA ROSA PEREZ BLANQUICETH y DARWIN YESID DIAZ por el fallecimiento del señor FEDER ANTONIO DIAZ MEDINA acaecida el día 13 de febrero de 1997 y en la que fue absuelta de todas las pretensiones a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, lo anterior al haberse acreditado en el proceso con pruebas documentales y testimoniales que el fallecimiento del FEDER ANTONIO DIAZ MEDINA fue de origen profesional, toda vez que al momento de la muerte se encontraba trabajando en una finca ganadera La palmera ubicada en el municipio de Chigorodó (Antioquia) de la cual fue sacado a la fuerza en horario laboral y posteriormente asesinado, presentándose un nexo de causalidad indirecto, hubo una fuerza mayor que fue imposible resistir y la cual estaba dentro del contrato de trabajo, había una subordinación del empleador, estaba atendiendo el horario laboral, lo que significa que se encontraba cubierto por el riesgo de manera objetiva por la ARL, y para respaldar su tesis pone de presente una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, SL2582 de 2019 con radicación 71655 M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.

A la referida a apoderada judicial se le reconoce personería para actuar en los términos del memorial de sustitución poder allegado al plenario.

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da

mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Naturaleza jurídica de la pretensión. -Pensión de sobrevivientes por muerte de afiliado, origen del evento, prescripción intereses moratorios. Teniendo en cuenta los recursos de apelación impetrados, los cuales delimitan la competencia de la Sala en la segunda instancia, las controversias jurídicas que deben resolverse, consisten en determinar, en primer lugar, **I)** el origen del evento que ocasionó el fallecimiento del afiliado FEDER ANTONIO DÍAZ MEDINA, **II)** si los aquí demandantes ELVIA ROSA PÉREZ BLANQUICETH, DEYNER DAVID, y DARWIN YESID DÍAZ PÉREZ tienen derecho a la reactivación del derecho pensional que inicialmente les había sido reconocido por el extinto INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a través de la resolución N° 0308 de 1998, **III)** en caso afirmativo establecer a cuánto asciende el retroactivo pensional adeudado, teniendo en cuenta la excepción de prescripción propuesta, y **IV)** la procedencia o no de los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993.

Procede la Sala a resolver lo pertinente dentro de su competencia, advirtiendo que para el análisis del caso y en los términos del artículo 16 del Código Sustantivo de Trabajo, el cual precisa que las normas sobre trabajo, por ser de orden público producen efecto general inmediato, las disposiciones llamadas a regir el presente asunto son las contenidas en los artículos 46 y 47 de la ley 100 de 1993, en su versión original, así como el Decreto 1295 de 1994, como bien lo coligió el juez de primer grado.

Valga la pena advertir que en el presente asunto no resultan objeto de controversia los hechos relativos a:

- i)** La muerte del señor FEDER ANTONIO DÍAZ MEDINA, insuceso acaecido el 13 de febrero de 1997 (fls. 18).
- ii)** Que mediante resolución N° 0308 de 1998 el Instituto de Seguros Sociales les reconoció una pensión de sobrevivientes a los señores ELVIA ROSA PÉREZ BLANQUICETH, DEYNER DAVID, y DARWIN YESID DÍAZ PÉREZ, en calidad de compañera

permanente e hijos menores del afiliado fallecido FEDER ANTONIO DÍAZ MEDINA.

- iii) Que tal reconocimiento administrativo, fue revocado años mas tarde por la misma entidad a través de la resolución N° 00892 del 3 de septiembre de 2002 (fls.102-103) argumentándose lo siguiente: *“Que la resolución No 0308 de 1998 es ampliamente violatoria de los artículos 7 34 y 49 del Decreto 1295 de 1994, por cuanto la muerte del asegurado fue calificada como de origen común por la Junta regional de Calificación de Invalidez de Antioquia según dictamen N° 2539 de fecha 9 de junio de 1999...”*
- iv) Que en el referido dictamen médico laboral (fls. 114-117) se realizó la siguiente descripción del evento por parte de la junta: *“...A las 7 de la mañana del 13 de febrero de 1997 estaba ordeñando y entraron 2 personas que se lo llevaron y luego apareció muerto...”*
- v) Que mediante derecho de petición radicado ante POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. el día 23 de abril de 2015, los señores ELVIA ROSA PÉREZ BLANQUICETH, DEYNER DAVID, y DARWIN YESID DÍAZ PÉREZ le solicitaron a dicha entidad el pago de la pensión de sobrevivientes a partir del 1° de septiembre de 2002 (fls.51 y 52).

Debe recordarse que para la fecha de en que se produjo el fallecimiento del señor FEDER ANTONIO DÍAZ MEDINA, que lo fue el día 13 de febrero de 1997, el accidente de trabajo se encontraba definido por el artículo 9° del Decreto 1295 de 1994 en los siguientes términos:

"ARTÍCULO 9. *Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.*

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajos desde su

residencia a los lugares trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

De la anterior definición legal, resulta claro que el accidente de trabajo consiste en aquella eventualidad que afecta la salud física o psíquica del trabajador y que incluso puede conllevar a su muerte, siempre y cuando ocurra por causa o con ocasión del trabajo. Esto significa que –por su propia naturaleza– este accidente se encuentra vinculado con el cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato laboral enunciadas en el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo, las cuales consisten –básicamente– en realizar de manera personal la labor encomendada, cumplir con los reglamentos, obedecer las órdenes e instrucciones impartidas por el empleador.

Así las cosas, el accidente que ocurre con causa del trabajo, se refiere a una relación directa derivada del desarrollo de la labor para la cual se contrató al trabajador y las actividades relacionadas con la misma; mientras que, con ocasión del trabajo, plantea una causalidad indirecta, es decir, un vínculo de oportunidad o de circunstancias, entre el hecho y las funciones que desempeña el empleado.

CASO CONCRETO

Descendiendo al caso concreto del afiliado FEDER ANTONIO DÍAZ MEDINA, está probado que este falleció un día 13 de febrero de 1997, siendo víctima de un homicidio, perpetrado por unos sujetos que por la fuerza lo sustrajeron de su lugar de trabajo, “FINCA LA PALMERA” ubicada en la vereda “LA GUAPÁ” del Municipio de Chigorodo – Ant., cuando se encontraba realizando labores de ordeño de ganado al servicio de su empleador “JOSÉ CARO PINEDA”, tal y como consta en el dictamen N° 2539 de 1999 emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, obrante a folios 115 al 117 del plenario.

Igualmente, del CERTIFICADO INDIVIDUAL DE DEFUNCIÓN contenido en el expediente administrativo aportado en medio magnético, se evidencia que el señor FEDER ANTONIO DÍAZ MEDINA falleció por un “SHOCK TRAUMATICO” producido por un proyectil de arma de fuego.

También obra al interior del plenario un informe patronal de presunto accidente de trabajo del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de fecha 17 de marzo de 1997, y en el ítem relativo a que actividad u oficio estaba ejecutando el trabajador en el momento del accidente, se diligenció: “ordeñando”, y luego en el ítem de como ocurrió el accidente se diligenció lo siguiente: “a las 7 de la mañana estaba ordeñando y entraron 2 personas y se lo llevaron y apareció muerto”.

Y si bien en el presente caso el origen del accidente de trabajo fue calificado como un evento de origen común por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, estima la Sala tal calificación no se compadece con la normatividad aplicable artículo 9° del Decreto 1295 de 1994, concretamente con la definición del accidente de trabajo que acontece con ocasión al trabajo, esto es aquel accidente que se configura mediante una causalidad indirecta, es decir, un vínculo de oportunidad o de circunstancias, entre el hecho y las funciones que desempeña el empleado.

Y es que la prueba documental y el interrogatorio de parte practicado a la demandante, está probado en el plenario que el señor DÍAZ MEDINA se encontraba en las instalaciones de la finca agroganadera denominada “FINCA LA PALMERA” realizando sus funciones de “ordeño” para las cuales había sido contratado y a eso de las 7:00 AM, esto es, dentro de la jornada laboral, fue abordado por unos sujetos que ingresaron a la finca, lo sustrajeron por la fuerza y luego lo asesinaron en las cercanías.

Tampoco quedó probado en el plenario que el afiliado fallecido, los demás trabajadores de la finca y el empleador hubieren sido objeto de amenazas con anterioridad al fallecimiento del afiliado.

En vista de lo anterior, no era factible colegir por parte de la Junta Regional de Calificación de invalidez de Antioquia, que el infortunio del trabajador FEDER ANTONIO DÍAZ MEDINA, tuvo un origen común, pues es evidente que su muerte se produjo durante su jornada laboral, bajo la subordinación de su empleador, circunstancias que por si solas configuran la profesionalidad del accidente de trabajo, independientemente que el homicidio

hubiese ocurrido por fuera de la finca agroganadera donde el trabajador ejecutaba sus labores, máxime que la aseguradora de riesgos laborales no probó el nexo de causalidad, esto es, que el fallecimiento del causante estuviese relacionado con algún problema de tipo personal.

Siendo este, el entendimiento que se le ha dado a la problemática por parte de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, como puede verse en las sentencias CSJ SL 17429-2002, CSJ SL 21629-2003, CSJSL 23202-2005, 25986, 4 abr. 2006, CSJ SL 24924 -2006, CSJ SL 28841-2007, CSJ SL 29156-2007, CSJ SL 36922-2010, CSJ SL351-2013, CSJ SL417-2018, CSJ SL-2582-2019, y CSJ-1730-2020.

En estas providencias el alto tribunal ha expuesto que la responsabilidad que se establece al empleador frente a los infortunios que ocurren en su esfera, o la administradora de riesgos laborales que asume ese mismo riesgo, es OBJETIVA; que la causalidad que debe haber entre el siniestro y la actividad laboral contratada, puede ser directa (con causa del trabajo) o indirecta (con ocasión del trabajo), y que no se rompe por un hecho del trabajador, de un tercero o por fuerza mayor o caso fortuito.

Para la Corte, existe responsabilidad objetiva porque el siniestro laboral se presenta bajo la subordinación del empleador, bien sea en el sitio de trabajo o por fuera de este, sin que sea necesario comprobar la culpa de aquel en tal hecho, pues lo realmente relevante, es que este riesgo se presente en el ámbito laboral.

Advierte además, que el accidente que ocurre con causa del trabajo, se refiere a una relación directa derivada del desarrollo de la labor para la cual se contrató al trabajador y las actividades relacionadas con la misma; mientras que con ocasión del trabajo, plantea una causalidad indirecta, es decir, un vínculo de oportunidad o de circunstancias, entre el hecho y las funciones que desempeña el trabajador, y que si bien existen casos en los que se dan circunstancias externas que pueden romper el nexo de causalidad, las mismas deben acreditarse en el proceso, así se indicó en la sentencia SL-1730 de 2020, M.P. JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN.

“...Contrario a lo expresado por el recurrente, el Tribunal no desconoció que, para ser calificado como de origen laboral, el hecho debía enmarcarse de manera directa o indirecta en el riesgo ocupacional creado por el empleador, esto es, que debía sobrevenir por causa o con ocasión de la actividad laboral, lo que constituye el nexo causal para la calificación del origen, que advirtió acreditado, pues justamente ese análisis efectuó en las consideraciones de la decisión, para concluir acertadamente que, como el afiliado se encontraba ejecutando la actividad laboral para la que fue contratado, en el horario habitual de trabajo, bajo la autoridad de su empleadora, el infortunio tuvo origen profesional, sin que la ARL demostrara la ruptura del nexo causal, esto es, una causa u origen distintos...”

Criterio jurisprudencial que acoge y comparte esta Sala, y dado que en el presente asunto no se logró desvirtuar ese nexo de causalidad entre el fallecimiento del señor DÍAZ MEDINA y su labor al interior de finca agroganadera la palmera, la calificación del origen no puede ser otra distinta que el profesional, en consecuencia, habrá de confirmarse lo resuelto en este sentido por el juez de primera grado, desestimando las argumentaciones presentadas por la apoderada judicial de la UGPP en su recurso de alzada.

En cuanto a la calidad de beneficiarios que detentan los aquí demandantes, la Sala confirmará lo resuelto en este sentido, pues este requisito legal jamás estuvo en discusión, por el contrario, fue aceptado en su momento por la ARP del Instituto de Seguros Sociales mediante resolución N° 00308 de 1998, y en el caso concreto de la compañera permanente ELVIA ROSA PÉREZ BLANQUICETH, debe dejarse en claro que esta reclamante ni siquiera tenía que acreditar convivencia mínima de 2 años, pues el literal a) del primigenio art. 47 de la Ley 100 de 1993, exoneraba de tal convivencia a aquella cónyuge o compañera permanente que hubiese procreado uno o más hijos con el causante, en los dos últimos años anteriores al deceso, y según se aprecia en el registro civil de nacimiento del joven DARWIN YESID DÍAZ PÉREZ aportado en medio magnético, este nació el día 3 de septiembre de 1996, esto es, dentro del rango establecido en la citada normativa.

Prescripción y disfrute pensional

En atención al recurso de apelación formulado por el apoderado judicial de la parte demandante, pasa esta Sala a resolver si en el caso del joven

DEYNER DAVID DÍAZ PÉREZ se configuró o no en forma total la prescripción de la acción para reclamar el pago del porcentaje pensional adeudado.

Y para ello, debe tenerse en cuenta que, al momento del fallecimiento del asegurado, 13 de febrero de 1997, el joven DEYNER DAVID, era menor de edad, por lo que el término prescriptivo se suspendió, hasta tanto alcanzó la mayoría de edad, lo cual ocurrió el 5 de septiembre de 2012, y por ende solo estaba facultado para reclamar la reactivación de su derecho pensional hasta el día 5 de septiembre de 2015.

Y según se aprecia a folios 51 al 52 del plenario, este joven junto a su madre y hermano, elevaron reclamación administrativa ante POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. el día 23 de abril de 2015, es decir, antes de que transcurriese el término prescriptivo de 3 años al que aluden los arts. 488 del CST y 151 del CPTSS, interrumpiendo así la prescripción por una sola vez, y dado que la demanda ordinaria laboral se presentó el día 3 de octubre de 2016 (fls.16), concluye la Sala que en el sub lite no alcanzó a operar la prescripción de la acción declarada en la primera instancia, motivos por los cuales se revocará lo resuelto en este sentido en relación con el joven DEYNER DAVID DÍAZ PÉREZ, y pasa la Sala a liquidar el retroactivo que les corresponde a los dos hijos menores del causante desde la suspensión del derecho pensional (1° de septiembre de 2002 y hasta el momento en que arribaron a la mayoría de edad, así:

A favor del señor DEYNER DAVID DÍAZ PÉREZ, el retroactivo a pagar por el periodo comprendido entre el 1° de septiembre de 2002 y el 5 de septiembre de 2012, es de **\$15.411.693.**

A favor del señor DARWIN YESID DÍAZ PÉREZ el retroactivo a pagar por el periodo comprendido entre el 1° de septiembre de 2002 y el 3 de septiembre de 2014, es de **\$23.706.740.**

Encontrando la Sala que el retroactivo pensional liquidado a favor de la compañera permanente ELVIA ROSA PÉREZ BLANQUICETH, se encuentra ajustado tanto al número de mesadas pensionales (14 mesadas por haberse causado la pensión con anterioridad a la vigencia del acto legislativo 01 de 2005), así como al salario mínimo legal mensual vigente para cada anualidad.

No obstante, en atención al grado jurisdiccional de consulta que la asiste a la UGPP, y teniendo en cuenta que el aporte obligatorio en salud es una obligación de todo pensionado, tal y como lo dispone el art. 143 de la Ley 100 de 1993, se adicionará la sentencia de primera instancia en el sentido de autorizar a la UGPP a retener del retroactivo pensional adeudado a cada uno de los demandantes, el porcentaje del aporte obligatorio con destino al subsistema de salud.

Intereses moratorios

Finamente en relación con la pretensión consecuencial de los intereses moratorios, del artículo 141 de la ley 100 de 1993, estima esta corporación que los mismos no están llamados a prosperar en el sub lite, acogiendo de esta manera el recurso de apelación formulado por la apoderada judicial de la UGPP, dado que el motivo por el cual se negó la reactivación de la prestación económica de sobrevivientes no fue otro distinto que la calificación del evento como de origen común por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, lo que derivó en la revocatoria de resolución inicial 00308 de 1998 expedida por la extinta ARP del ISS, e imposibilitó un nuevo reconocimiento o reactivación pensional a través de la vía administrativa por parte de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., y es solo mediante este proceso judicial, y en aplicación de la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que se logró la demostración de la profesionalidad del accidente que le cobro la vida al afiliado FEDER ANTONIO DÍAZ MEDINA, facultad interpretativa que solamente le está conferida al administrador de justicia para la resolución de los conflictos que tiene bajo su competencia, y al ser ello así la pasiva tenía elementos de ley suficientes para negar el derecho pensional, razones por las que la Sala considera que en el caso planteado no

hay lugar a condena a intereses moratorios, sin embargo accederá a la INDEXACIÓN DE LAS CONDENAS como mecanismo para, además de mantener el poder adquisitivo constante de las mesadas pensionales, subsanar el retardo de la entidad demandada en pagar la pensión, indexación que debe ser calculada por la UGPP a partir del 1° de septiembre de 2002, en el caso de los hijos, y a partir del 3 de octubre de 2013, para la compañera permanente, mes a mes y sobre cada una de las mesadas que componen el retroactivo pensional adeudado hasta el momento en que se produzca su pago efectivo, Para liquidar la indexación la pasiva tendrá en cuenta la siguiente formula:

$$\frac{\text{ÍNDICE FINAL}}{\text{ÍNDICE INICIAL}} \times \text{VALOR A INDEXAR} - \text{VALOR A INDEXAR}$$

Advierte la Sala, que si bien la pretensión de indexación no está contenida en acápite de pretensiones, la misma puede ser reconocida oficiosamente por el administrador de justicia, pues los hechos notorios no requieren demostración alguna, como ocurre con el fenómeno inflacionario, y este el entendimiento dado al tema por parte de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, como puede verse en la sentencia reciente SL359-2021, donde se rememoran unan sentencian de la Sala de Casación Civil de la misma Corte, SC6185-2014, y SC, 18 dic. 2012, rad. 2004-00172, donde se adoctrino lo siguiente:

“(i) la indexación no pedida en la demanda, pero concedida por el juez de segundo grado, no trasgrede alguna disposición sustantiva, «dado que en verdad, en ésta (sic) no se concedió más de lo requerido, sino la misma cantidad, pero traída a valor presente [...]»; (ii) ello no excede el orden legal o constitucional, sino que, contrario, «lo respeta y preserva, mayor aún, si se tiene en cuenta que la actualización del monto del perjuicio, lo que comporta es desarrollo del principio de equidad y plenitud del pago implícitamente solicitado»; y (iii) la consecuencia de esto es que el referido ajuste deba entenderse «[...] como un factor compensatorio, con el que se mantiene el poder adquisitivo de la moneda, cuando por el transcurso del tiempo, ésta (sic) se devalúa”.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la decisión proferida, y la prosperidad total y parcial de los recursos de apelación formulados por los apoderados judiciales de la parte demandante y la codemandada UGPP no habrá lugar a imponer condena en costas procesales en esta instancia.

VIII. – DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESULEVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia objeto de apelación y consulta de fecha y procedencia conocida, en cuanto declaró probada la excepción de prescripción en relación con el señor DEYNER DAVID DÍAZ PÉREZ, y absolvió a la UGPP del retroactivo pensional deprecado, para en su lugar, **DECLARAR** improbadamente esta excepción y disponer que el retroactivo pensional adeudado a los señores DEYNER DAVID DÍAZ PÉREZ y DARWIN YESID DÍAZ PÉREZ, son las sumas de **\$15.411.693**, y **\$23.706.740** respectivamente, según lo indicado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REVOCAR la condena por intereses moratorios del art. 141 de la ley 100 de 1993, y en su lugar ordenar la indexación del retroactivo pensional adeudado a los demandantes, a partir del 1° de septiembre de 2002, en el caso de los hijos DEYNER DAVID y DARWIN YESID DÍAZ PÉREZ, y a partir del 3 de octubre de 2013, para la compañera permanente ELVIA ROSA PÉREZ BLANQUICETH, a cargo de la UGPP, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.


TERCERO: ADICIONAR la sentencia objeto de apelación y consulta de fecha y procedencia conocida, en el sentido de AUTORIZAR a la UGPP a efectuar la deducción del aporte obligatorio en salud, sobre cada una de las mesadas que componen el retroactivo pensional adeudado a los demandantes ELVIA ROSA PÉREZ BLANQUICETH, DEYNER DAVID y DARWIN YESID DÍAZ PÉREZ, según lo expuesto en precedencia.


CUARTO: CONFIRMAR la sentencia objeto de apelación y consulta de origen y fecha conocidos en todo lo demás, conforme las consideraciones que anteceden.


QUINTO: Sin COSTAS en esta instancia.

SEXTO: Se ordena la notificación por **ESTADOS** de esta providencia, la devolución del proceso al juzgado de origen y se autoriza su reproducción virtual a las partes del proceso.

Los Magistrados:


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 088 del 24 de mayo de 2021.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>